

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTE	EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA
EJECUTADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-019-2017-00565-01
TEMA	Prescripción de la acción ejecutiva laboral conexas.
DECISIÓN	Revoca auto.

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en los Acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento escrito, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por el señor **EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 035**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Mediante proceso ejecutivo laboral conexo, el señor EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA solicita se libre MANDAMIENTO DE PAGO a su favor, y a cargo de COLPENSIONES por las siguientes sumas de dinero:

“PRIMERO: Como capital insoluto por concepto de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional reconocido, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$54.013.436).

SEGUNDO: Como capital insoluto por concepto de costas procesales y agencias en derecho, la suma de DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$10.730.707), discriminados de la siguiente manera:

**Costas procesales de primera instancia: Nueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Siete Pesos (\$9.485.207).*

**Costas procesales en segunda instancia: Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Pesos (\$589.500).*

TERCERO: Por los intereses legales, o en subsidio la indexación, causados sobre el capital insoluto y hasta que se verifique el pago total de la obligación o la liquidación del crédito.

CUARTO: Condenar a la entidad demandada, al pago de las costas procesales y agencias en derecho.”

También solicitó, como MEDIDA CAUTELAR, el embargo de los dineros depositados en las cuentas corrientes de la ejecutada, lo anterior para garantizar el cumplimiento y pago de las obligaciones objeto de ejecución.

Mediante auto del 10 de abril de 2018 el JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN (fls. 28 y 29), LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO por las siguientes sumas:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por la vía ejecutiva laboral, a favor del señor EVERARDO ANTONIO HOLGUIN VALENCIA y en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – con NIT 900.336.004-7, representada legalmente por la Doctora ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ o por quien haga sus veces al momento del mandamiento de pago, por el siguiente concepto:

**\$9.485.207 por costas de primera instancia.*

**\$589.500 por costas de segunda instancia.*

**\$54.013.436 por diferencia de los intereses moratorios.*

**La indexación de las costas procesales.*

Negó el mandamiento de pago por todo lo demás, y decreto un embargo de cuentas bancarias, limitado a la suma de \$64.088.143

La entidad ejecutada COLPENSIONES a través de su apoderada judicial, descorrió el traslado otorgado (fls. 37 al 47), oponiéndose al mandamiento de pago librado en su contra, y formuló en su defensa las excepciones de fondo que denominó: *“PRESCRIPCIÓN; PAGO; COMPENSACIÓN; e INEXISTENCIA DE TÍTULO EJECUTIVO”*.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:

En audiencia pública de resolución de excepciones celebrada el 18 de octubre de 2019, la Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN propuesta por la apoderada judicial de COLPENSIONES, y la consecuente terminación del proceso ejecutivo laboral conexo, imponiendo las costas procesales a cargo del

ejecutante y a favor de la ejecutada, dentro de las cuales, fijó como agencias en derecho la suma de \$100.000.

También dispuso, la entrega del título por embargo a COLPENSIONES por valor de \$64.088.143, una vez quede ejecutoriada la decisión de instancia.

Como fundamento de su decisión, y en relación con la excepción de prescripción propuesta, estimó la juez de primer grado que, si bien es cierta la deficitaria liquidación de la condena por intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 según consta en el cálculo efectuado en la primera instancia visible a folios 70 del plenario, no puede perderse de vista que la parte ejecutante dejó prescribir la acción ejecutiva laboral, al haber transcurrido más de 3 años entre la fecha de presentación de la cuenta de cobro ante COLPENSIONES (17 de marzo de 2014), y la fecha de presentación de la demanda (7 de abril de 2017), pues conforme a la actual postura jurisprudencial (CSJ STL-7311-2019, STL11275-2016, STL-14542-2018 y STL-7447-2019), la interrupción de la prescripción solo procede por una sola vez, con la cuenta de cobro, y la eventual respuesta que llegue a brindar la entidad no es óbice para contabilizar el término prescriptivo.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación, por la apoderada judicial del ejecutante, quien expresó su inconformismo frente a la declaratoria de la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, argumentado para ello, que varias Salas de este Tribunal aún siguen con la postura jurisprudencial establecida en la sentencia STL-9772 de 2018, según la cual el término prescriptivo solo puede computarse desde el momento en que se entiende agotada la reclamación administrativa, toda vez, que es la respuesta de la entidad, la que habilita a la parte a formular su acción judicial, pues es a partir de ese momento que el ejecutante se da cuenta de la errónea liquidación de la condena por intereses moratorios, y en el presente ocurrió, con la notificación de la resolución N° GNR-57837 de 2016, que data del 3 de marzo de 2016, motivos por los cuales solicita se revoque lo resuelto en

primera instancia, y en su lugar se declare probada la improsperidad de esta excepción y se continúe con la ejecución.

Alegatos de conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de COLPENSIONES, presentó sus alegatos de conclusión ante esta instancia, solicitando se confirme lo resultó por la a quo, en tanto se evidencia el pago por parte de la entidad ejecutada, así como el avante de la excepción de prescripción de la deuda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a determinar si frente a la acción ejecutiva laboral conexas impetrada por el señor EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA, se configuró o no el fenómeno prescriptivo.

Para resolver debe recordarse que mediante sentencia ordinaria laboral de primera instancia de fecha 29 de abril de 2013 (fls. 64 y 65) el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA una pensión especial y anticipada de vejez por hijo invalido a cargo, a partir del 20 de agosto de 2010, y a título de retroactivo pensional dispuso el pago de \$88.957.072, e igualmente ordenó el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993 sobre las mesadas que componen este retroactivo, los cuales debían ser calculados por la accionada a partir del 21 de diciembre de 2010, imponiendo las costas de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor del señor HOLGUÍN VALENCIA.

Esta decisión fue confirmada en segunda instancia en sentencia del 3 de septiembre de 2013 (fls. 70), donde también se condenó en costas procesales a

COLPENSIONES y a favor del ejecutante, fijando como agencias en derecho la suma equivalente a 1 SMLMV.

Para dar cumplimiento a lo resuelto en estas providencias, la entidad ejecutada profirió las resoluciones N° GNR-253098 del 12 de julio de 2014, y GNR-57837 del 24 de febrero de 2016, visibles a folios 11 al 17 del cuaderno ejecutivo.

En el primero de estos actos administrativos, COLPENSIONES decidió incluir al señor HOLGUÍN VALENCIA en nómina de pensionados, a partir del periodo julio de 2014, pero dejó en suspenso el reconocimiento y pago del retroactivo causado desde el 20 de agosto de 2010, y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Estos dos últimos conceptos le fueron reconocidos al ejecutante, a través de la resolución N° GNR-57837 del 24 de febrero de 2016, misma que le fue notificada personalmente el día 3 de marzo de 2016 (fls.14 del cuaderno ejecutivo), donde se dispuso a su favor la suma de \$224.036.035, dentro de la cual, \$106.726.924 correspondían a intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, en la presente demanda ejecutiva laboral conexas, la parte ejecutante argumenta que ese valor pagado por concepto de intereses moratorios, es deficitario, pues el valor que debió haberse reconocido en la resolución N° GNR-57837 del 24 de febrero de 2016 era de \$160.740.360, presentándose así un valor insoluto de \$54.013.436, que debe ser objeto de cobro coactivo, junto con las costas procesales de primera y segunda instancia, que totalizan \$10.730.707, ya que no fueron incluidas en los actos administrativos expedidos por la entidad ejecutada.

Estando claro lo anterior, pasa esta Sala a determinar, el momento a partir del cual, se hicieron exigibles esos valores insolutos de \$54.013.436, y \$10.730.707, para así saber si la acción ejecutiva laboral impetrada, fue o no

presentada en forma oportuna, en atención el término de prescripción que aplica en materia laboral y seguridad social.

Al respecto estima la Sala que, en materia laboral y seguridad social el fenómeno de la prescripción extintiva se encuentra regulado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, así:

“ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”

“ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.”

Sin que haya lugar a la aplicación de otras normativas que regulen el mismo fenómeno jurídico, como lo serían los artículos 2535 y 2536 del Código Civil citados por la apoderada judicial de COLPENSIONES al formular la excepción de prescripción; lo anterior, por cuanto el mismo estatuto procesal laboral en su art. 145 dispone expresamente que la aplicación analógica de otras normativas, solo opera **a falta de disposiciones especiales** en el procedimiento del trabajo, lo cual no ocurre tratándose de la prescripción, pues esta materia se encuentra regulada íntegramente.

En relación con la acción ejecutiva a continuación de proceso ordinario, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia STL3128 de 11 de septiembre de 2013, radicado 33598, consideró lo siguiente:

“...No obstante lo anterior, y pese a que no hay lugar a que prospere la presente acción constitucional, extraña a esta Sala Laboral, la aplicación del artículo 2536 del C. C., por parte del

Tribunal accionado cuando para ello hay norma especial como lo es el artículo 151 del C. P. del T. y de la S. S., que estatuye que “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, medida a la cual no hizo referencia el a quem, pese a que lo reclamado en el proceso ejecutivo se trataba de un derecho social que le fue reconocido a través de una sentencia judicial, situación que conllevaba a efectos de definir si resultaba exigible la obligación a cargo de la parte vencida, la necesidad inobjetable de su aplicación por ser una disposición propia del procedimiento laboral, escenario que de contera imposibilitaba emplear el artículo 2536 del C. C., ante la existencia de una disposición que gobernaba el asunto debatido...”

Visto lo anterior, es la prescripción trienal establecida en los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, la que debe analizarse en el presente asunto, pues los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, son un derecho social, consagrado a favor de aquellos pensionados a los que tardíamente se les reconoció y pago una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, pese haber presentado la solicitud pensional con el lleno de los requisitos legales, y la documentación necesaria.

Estas normativas disponen que la referida prescripción extintiva debe contarse desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, y en el presente evento, la exigibilidad de ese mayor valor o suma insoluta de intereses moratorios, y costas procesales, se hizo exigible al momento mismo de notificarse el acto administrativo N° GNR-57837 del 24 de febrero de 2016, esto es, el día 3 de marzo de 2016, pues fue a partir de esa fecha, que a su vez, hizo las veces de interrupción de la prescripción, que el aquí ejecutante pudo conocer la suma liquidada por COLPENSIONES a título de intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, así como no pago de las costas procesales, pues antes de notificársele tal resolución, dicho valor era un interrogante, dado que la orden proferida en ese sentido había sido en abstracto, pues la sentencia ordinaria laboral solo indicó el extremo inicial de liquidación de estos intereses, pero el cálculo definitivo de la condena había quedado a cargo de la administradora de pensiones, quien también debía incluir el valor de la condena en costas.

En efecto, solo a partir del 3 de marzo de 2016, fecha de notificación del acto administrativo N° GNR-57837 del 24 de febrero de 2016, el ejecutante quedó habilitado para reclamar ese mayor valor de los intereses y las costas procesales otorgadas en las instancias, y no porque fuese necesario un agotamiento de la reclamación administrativa en este sentido, es decir, entendida esta reclamación como un requisito de procedibilidad previo a la presentación de la acción ejecutiva laboral conexa, pues tal exigencia solo aplica frente al proceso ordinario laboral, sino porque la notificación de la respuesta brindada por la entidad, constituye en sí misma, la fecha de exigibilidad de la obligación, consistente en el mayor valor de los intereses moratorios y las costas procesales insolutas. En consecuencia, y dado que la demanda ejecutiva laboral conexa se presentó el día 7 de abril de 2017, según consta a folios 1 del cuaderno ejecutivo, es evidente para la Sala, que no alcanzó a transcurrir el término trienal de prescripción ya analizado.

Motivos por los cuales habrá de revocarse lo resuelto en cuanto a la prosperidad de esta excepción, y en su lugar, ordenar al a quo a continuar adelante con la ejecución de estos conceptos.

Sin costas en esta actuación.

V. D E C I S I Ó N

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

R E S U E L V E:

Primero: REVOCAR el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 18 de octubre de 2019, proferido por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar, **DECLARAR** la improsperidad de la **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN** propuesta por la apoderada judicial de **COLPENSIONES**, y

ordenar continuar adelante con la ejecución a favor del señor EVERARDO ANTONIO HOLGUÍN VALENCIA, según lo expuesto en precedencia.

Segundo: Sin costas en esta instancia.

Tercero: Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 125 del 19 de julio de 2021.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>